



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**CAMARA APEL CIV. Y COM 4a**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 230

Año: 2022 Tomo: 3 Folio: 778-785

EXPEDIENTE SAC: 276917 - MUNICIPALIDAD DE CALCHIN C/ AMX ARGENTINA S.A. - EJECUTIVO FISCAL

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 230 DEL 29/08/2022

**AUTO NUMERO: 230.**

**CORDOBA, 29/08/2022.**

**Y VISTOS:**

Estos autos caratulados “**Municipalidad de Calchín c/ AMX ARGENTINA S.A. – Ejecutivo Fiscal – Expte. N° 276917**”, venidos a esta sede con motivo del recurso de apelación articulado en subsidio al de reposición, en contra del decreto dictado por la Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, Oficina única de Ejecución Fiscal, con fecha 27/05/2019, que textualmente reza: “...*Atento lo resuelto mediante proveído del día de la fecha en autos "Municipalidad de Río Segundo c/ AMX Argentina S.A. - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 5584301"; advirtiéndole que la parte demandada no ha sido notificada en forma; lo resuelto mediante Sentencia N° 105 de fecha 18/09/2018 dictada por la Excm. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de la Ciudad de Córdoba y lo dispuesto por el art. 9 de la Ley 9024; revócase por contrario imperio los proveídos de fechas 07/02/2019 (fs. 495) y 01/04/2019 (fs. 513) en todo cuanto disponen. En su mérito; proveyendo a fs. 406/420: ocurra por la vía que corresponda.- NOTIFÍQUESE.*”.

La resolución transcripta fue mantenida por decreto de fecha 03/12/2019 que expresa: “...*Proveyendo a fs. 518/521: por notificado en la forma que expresa. Proveyendo al recurso de reposición interpuesto en contra del proveído de fecha 27/05/2019 obrante a fs. 517; debo*

*decir que, si bien en principio se dictaron los proveídos de fechas 07/02/2019 y 01/04/2019, los mismos no han sido notificados a la parte actora. Por otra parte, se advierte que a fs. 394, la demandada interpone aclaratoria de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4° Nominación de la Ciudad de Córdoba, solicitando se resuelva la petición de devolución del capital, intereses y costas, recurso que la Cámara rechaza por improcedente, por lo que mal puede la suscripta hacer lugar a tal pretensión. En efecto, mediante el proveído impugnado se pretende asegurar a la demandada la garantía jurisdiccional para remediar su situación. Autorizada doctrina ha conceptualizado a la repetición tributaria como “[...] la relación jurídica [...] que surge cuando una persona paga al fisco un importe tributario que por diversos motivos no resulta legítimamente adeudado y pretende luego su restitución” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, derecho financiero y tributaria, t. I, Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 363).- En el juicio ejecutivo fiscal, para que proceda esta vía es necesario que anteceda el pago de la condena y sus accesorios, como en el caso de autos. Sin embargo, no puede decirse que se encuentre expresamente determinado o actualizado lo que abonó. La determinación del quantum de la restitución pretendida deberá efectuarse por el procedimiento que corresponda, en el caso, el juicio ordinario de repetición. Por ello, corresponde rechazar el recurso de reposición. Concédase el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4° Nominación de la Ciudad de Córdoba por haber prevenido en las presentes actuaciones donde deberán comparecer las partes a los fines de su prosecución. Emplácese a las partes para que en el término de tres días constituyan domicilio ante la Alzada, bajo apercibimiento de ley.- Proveyendo a fs. 522: estése a las constancias de autos.- NOTIFÍQUESE.” .*

#### **Y CONSIDERANDO:**

**I)** Radicados los autos en la alzada, la parte apelante expresa agravios a través de su apoderado mediante presentación electrónica de fecha 14/02/2022. Por decreto del mismo día

se corrió traslado para su contestación a la parte actora, declarada rebelde en el juicio por proveído de fecha 18/05/2021, certificándose el vencimiento del plazo sin que haya sido evacuado, tal como se desprende de las operaciones del SACM de fecha 21/04/2021.

Cumplimentados los demás trámites de ley, queda la cuestión en condiciones de ser resuelta.

**II) a.** En su expresión de agravios el apelante principia efectuando un detalle de las actuaciones que sirven de precedente al conflicto apelativo.

Así, sostiene que con fecha 18 de septiembre de 2018, esta cámara -mediante la Sentencia N° 105- resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por su mandante contra la Sentencia N° 02 de fecha 18 de diciembre de 2012, dictada por la Sra. Juez Civ. Com. Conc. y Familia de Río Segundo, Oficina de Ejecución Fiscal, la que, a su tiempo, había resuelto rechazar las excepciones opuestas por su mandante y mandar llevar adelante la ejecución promovida por la Municipalidad de Calchín en contra de AMX en concepto de tributos, intereses y multa hasta cubrir la suma de \$180.240,84 (pesos ciento ochenta mil doscientos cuarenta con 84/100), con más los intereses y costas.

Sigue diciendo que para resolver en tal sentido, se tuvo en cuenta su postura en la litis, toda vez que la cuestión había sido dirimida en la causa “AMX ARGENTINA S.A. C. MUNICIPALIDAD DE CALCHIN - PLENA JURISDICCION”, Expte. N° 1413296 (en adelante, el “Expediente Principal”), en el marco de la cual la Cámara en lo Contencioso Administrativo de segunda nominación dictó la Sentencia N° 130 del 14 de septiembre de 2017, por medio de la cual resolvió que la Resolución 70/09 de la Municipalidad de Calchín, como su confirmatoria 02/10, eran nulas “por violentar el concepto de sustento territorial necesario para que funcione la potestad tributaria municipal” (sentencia firme, fs. 373).

Agrega que a raíz de dicha sentencia, y una vez que el expediente fue remitido nuevamente a primera instancia, su mandante solicitó -con fecha 28 de diciembre de 2018- la restitución de los fondos abonados en oportunidad de la ejecución de sentencia llevada adelante por la actora, los cuales ascendieron a la suma de \$260.152,24, habiendo la actora y su

representación letrada cobrado efectivamente la suma de \$250.310,32 (pesos doscientos cincuenta mil trescientos diez con 32/100), tal como se encuentra acreditado con las constancias que obran en las presentes actuaciones. Que frente a dicha presentación, el Juzgado interviniente ordenó con fecha 7 de febrero de 2019 el emplazamiento a la Municipalidad de Calchín a fin de que en el término de diez días restituya a su mandante la suma de \$ 250.310,32 percibidas por dicho Municipio conforme surge de las constancias del cuerpo de ejecución de sentencia que se ha incorporado a los presentes, bajo apercibimiento de ley.

Que posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2019, su parte realizó una presentación solicitando al Juzgado de la instancia anterior se pronuncie con relación a los intereses que corresponden aplicar al pago efectuado. Que con fecha 1° de abril de 2019, el Juzgado hizo saber que correspondía calcular los intereses conforme el criterio aplicado por el Tribunal al momento del dictado de la sentencia de primera instancia para los supuestos de ejecuciones fiscales, tal como se dispuso en el considerando IV de la Sentencia N° 2 de fecha 18 de diciembre de 2012, que resultan procedentes en los supuestos de acogimiento o rechazo de la demanda.

Que sin perjuicio de ello, con fecha 27 de mayo de 2019 dictó el decreto contra el que su mandante procedió a interponer recurso de reposición con apelación en subsidio, solicitando que, en definitiva, se intime a la contraria a devolver la suma de \$250.310,32 (pesos doscientos cincuenta mil trescientos diez con 32/100) percibida sin fundamento, con más los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, bajo apercibimiento de ejecución.

**b.** En cuanto a los agravios que invoca, expone que no se comprende -ni se explicita en la Providencia- de qué modo el Proveído Impugnado aseguraría a AMX “la garantía jurisdiccional para remediar su situación”. Por el contrario, denegarle la posibilidad de obtener la devolución del pago efectuado en el marco de estas actuaciones, obligándola a iniciar un juicio ordinario de repetición, violenta manifiestamente su derecho de propiedad y

la garantía del debido proceso (art. 18 y 19 de la Constitución Nacional). Ello así, toda vez que su mandante ha transitado dos procesos judiciales (el principal y el juicio ejecutivo) obteniendo en ambos casos sentencias favorables -firmes- que avalan su pretensión y que demuestran que el pago realizado (en el marco de la ejecución de sentencia iniciada por la Municipalidad en estos autos) deviene incausado correspondiendo su inmediata devolución. Sigue diciendo que, asimismo, agravia a su parte que el juez *a quo* para resolver en el sentido antes indicado sostenga que “no se encuentra expresamente determinado o actualizado el monto que AMX abonó”. Señala que tal afirmación no solo resulta desacertada, en cuanto el importe abonado surge expresamente de las constancias obrantes en las actuaciones del Cuerpo de Ejecución de la Sentencia, sino que, además, constituye un despropósito obligar al inicio de un juicio ordinario de repetición al solo efecto de “actualizar el importe abonado”, siendo tal cuestión perfectamente determinable en estas actuaciones.

Afirma que la interpretación propiciada por la *a quo*, deviene irrazonable y contraria no solo a un elemental sentido de justicia, sino también a los principios de celeridad, economía jurisdiccional y tutela judicial efectiva, pues la devolución de las sumas ingresadas constituye una consecuencia directa e inherente de la Sentencia N° 105 emitida por el 18 de septiembre de 2019, que se encuentra firme y consentida, en virtud de la cual se declaró la improcedencia de la ejecución intentada por el Municipio atento a que en el Expediente Principal se declaró la nulidad de las Resoluciones 70/09 y 02/10 que dieran origen a las presentes actuaciones.

Considera que obligar a su mandante a transitar un proceso independiente en orden a obtener la devolución de tales sumas no solo constituiría un dispendio jurisdiccional excesivo, sino que resultaría lesivo de su derecho de propiedad reconocido en el art. 19 de la Constitución Nacional, toda vez que -pese a encontrarse reconocido su derecho en autos- se dilataría su reintegro de manera injustificada e innecesaria.

Aduce, por otra parte, que el proveído impugnado se funda en el art. 9 de la Ley 9.024 de la Provincia de Córdoba (en adelante, la “LCF”) que establece: “*En los casos de sentencias*

*dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de impuestos, la acción de repetición solo podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto adeudado, sus accesorios y costas”.*

Ahora bien, reflexiona que la norma no surge que su parte deba recurrir a una acción de repetición a los fines de obtener la devolución de los fondos abonados injustamente en estos autos. Por el contrario, la norma citada prevé un supuesto que no es aplicable al presente caso. Concretamente, la situación que allí se prevé difiere de la que interpretó el *a quo*: la previsión del art. 9 de la LCF es para aquellos casos en los que en el marco del juicio ejecutivo el demandado obtiene una sentencia definitiva y firme, contraria a sus defensas. Por el contrario, aduce que **en el caso de autos, la contraparte obtuvo sentencia favorable en primera instancia, la que fue revocada en segunda instancia, encontrándose firme y consentida.**

Es decir, la sentencia que quedó firme en estas actuaciones es favorable a su mandante y por ende la ejecución incoada por la Municipalidad devino incausada, injustificada e indebida.

Agrega que la interpretación que propicia surge también de una hermenéutica sistémica del texto legal. En ese sentido, hace notar que el artículo 8 del mismo cuerpo normativo establece la posibilidad para el contribuyente de apelar las sentencias dictadas en el marco de una ejecución fiscal, y por ello dispone que *“La sentencia de remate será apelable para el ejecutante y para el ejecutado que hubiese opuesto excepciones en término. El recurso no tendrá efecto suspensivo”*. Dice que resultaría totalmente absurdo que la propia norma permita al contribuyente apelar una sentencia dictada en el marco de un juicio de ejecución fiscal pero luego lo obligue a iniciar una acción de repetición en caso de obtener una sentencia favorable.

Señala, a modo de ejemplo, la diferencian de lo establecido en la LCF con otros cuerpos normativos -como por ejemplo la Ley 11863 de Procedimiento Tributario Federal- que expresamente le prohíben al demandado la posibilidad de apelar la sentencia de ejecución resultando como única opción la de iniciar una acción de repetición. Apunta que esta diferencia no es una mera casualidad, sino que, por el contrario, pone de relieve las diferentes

vías procesales que regulan los distintos cuerpos normativos de las distintas jurisdicciones de nuestro país.

Pone de manifiesto que en los presentes autos -con fecha 18 de diciembre de 2012- la Oficina Única de Ejecución Fiscal de Río Segundo dictó sentencia mandando a llevar adelante la presente ejecución por la suma de \$180.240,84 más intereses, y regulando los honorarios de la representación fiscal de la Municipalidad en la suma de \$69.974. Sin perjuicio de que dicha sentencia fue oportunamente apelada por AMX, la Municipalidad la ejecutó en el Cuerpo de Ejecución de Sentencia de esta misma ejecución -tal como ya fuera expuesto y comprobado en estas actuaciones- por lo que mi mandante transfirió en esa oportunidad la suma total de \$260.152,24. Dicho pago se realizó sin consentir la sentencia de primera instancia dictada en estos autos y al sólo efecto de evitar se sigan incrementando los intereses y costas improcedentemente impuestos a su cargo. De las sumas transferidas, la Municipalidad y su representación letrada cobraron efectivamente el monto de \$250.310,32 (pesos doscientos cincuenta mil trescientos diez con 32/100), tal como surge de las constancias obrantes en el Cuerpo de Ejecución referido. La sentencia de Cámara –que se encuentra firme y consentida- hizo lugar a la apelación interpuesta por AMX contra la Sentencia de primera instancia. De este modo, habiendo quedado firme el rechazo de la ejecución llevada a cabo por el Municipio, el cobro llevado a cabo anticipadamente por la actora devino incausado, resultando – a su entender- a todas luces absurdo que la Municipalidad pretenda que su mandante, luego de transitar distintas instancias judiciales, incurriendo en costos y tiempos adicionales, se encuentre obligada a iniciar una acción de repetición por un monto abonado en estos autos y cuyo sustento devino abstracto.

Cita jurisprudencia en su apoyo.

Por último, resalta que el proveído impugnado fue dictado sin que exista un planteo por parte de la contraria, lo que evidencia -a su entender- arbitrariedad y vulnera los derechos de su parte.

Pide, en definitiva, que se haga lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, se intime a la actora a devolver la suma percibida sin fundamento, con más los intereses devengados hasta la fecha de su pago, bajo apercibimiento de ejecución.

**III) a.** Las circunstancias especiales de este juicio, cuyo detalle omitiremos por cuanto se condicen adecuadamente con las que emanan del relato efectuado por el apelante en su expresión de agravios, tal lo transcripto en el punto anterior, nos llevan a considerar -en lo sustancial- procedente la queja.

**b.** La cuestión encuentra su anclaje procesal en el ámbito de la ejecución de una sentencia que resultó favorable al demandado al decidir rechazar la demanda con fundamento en la nulidad declarada en sede contencioso administrativa, de las resoluciones tributarias en las que se asentaron los certificados de deuda base de la ejecución.

En efecto, esta Cámara, con una integración diferente, en la Sentencia N° 105 del 18/09/2018, consideró que: *“...Tiene razón la apelante en lo atinente al contenido de la excepción de inhabilidad de título , pues como lo he recordado con anterioridad, con cita de jurisprudencia “Esto así, pues “...es menester precisar que, de acuerdo con las pautas supra indicadas, los tribunales inferiores también se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda , siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos, razón por la cual se concluye, sin dificultad, que no pueden ser tenidas como sentencias válidas aquellas que omitan tratar en forma adecuada las defensas aludidas, toda vez que aquéllas han de gravitar fundamentalmente en el resultado de la causa (arg. Fallos: 312:178, cons. 51 y 61). Además, de acuerdo con el art. 116 de la ley 11.683, resulta aplicable a su Título I -dentro del que se insertan los arts. 92 y cc., referidos a la ejecución fiscal- el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ordenamiento ritual que no excluye, para esta clase de procesos, la posibilidad de realizar diligencias probatorias (art. 549) a la par que exige, en todo caso, una resolución fundada*



*que desestime los elementos de juicio ofrecidos.” (Del dictamen del Procurador General, al que remitió la mayoría de la C.S.J.N. in re “Fisco Nacional Dirección General Impositiva c/Transportes 9 de Julio S.A.” resolución del 5.2.2008).”- Se trata, por ende, de establecer si es posible que la Municipalidad actora cobre una tasa con relación a la instalación de la actora (estructura portante de antenas) que no constituye –a juicio de esta última- un establecimiento comercial.- El punto ha sido dirimido en la causa “AMX ARGENTINA S.A. C. MUNICIPALIDAD DE CLACHIN - `PLENA JURISDICCION” (sentencia n° 130 del 14 de septiembre de 2017, emanada de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de segunda nominación de esta Ciudad, que se encuentra firme, fs. 373), en la que se dejó establecido que la resolución 70/09 de la Municipalidad de Calchín, como su confirmatoria n° 02/2010, son nulas por violentar el concepto de “sustento territorial” necesario para que funcione la potestad tributaria municipal.- De tal modo, la postura defensiva de la ejecutada se encuentra avalada jurisdiccionalmente, lo que lleva al acogimiento de la apelación deducida, sin que resulte necesario indagar en el acierto o desacierto del resto de los argumentos expuestos por la parte apelante, señalando, tan solo que las multas impuestas, si son materia de discusión en sede contencioso administrativa, no habilitan la vía ejecutiva, dado que las mismas deben estar firmes para poder ser ejecutadas (Conf. C.S.J.N. in re A.F.I.P. DGI C. Gervasini, Ernesto Andrés” del 11.7.07, Fallos 330:3045, entre otros”)... ” (cfr. voto del Dr. Raúl Fernández, fs. 392/392 vta.).*

En consonancia con el análisis realizado, la parte resolutive de la mencionada sentencia, dispuso: “... **I)** Acoger la apelación, revocar la sentencia cuestionada y rechazar la demanda. **II)** Costas en ambas instancias a la parte actora vencida (art. 130, C.P.C. y C.). **III)** Los honorarios por las tareas efectuadas en esta instancia se fijan para los abogados de la apelante, Dres. Fernando M. Montes y Nicholas Del Boca (en conjunto y proporción de ley), en el 40% del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459, y los del abogado del apelado, Dr. José María Sánchez, en el 30% del término medio de la escala de ley, todo

sobre lo que ha sido materia de agravio (art. 40 ley 9459). **IV)** Oportunamente se practique una nueva regulación de honorarios por las tareas de primera instancia, atento haber quedado la misma sin efecto en virtud de lo aquí resuelto.” (fs. 393).

La resolución así adoptada importó desconocer el derecho que esgrimía el Estado municipal a cobrar las liquidaciones que emitió en virtud de la deuda generada a partir de un procedimiento oficioso de determinación tributaria que concluyó con la Resolución N° 70 del 15/05/09, ratificada por la Resolución N° 20 del 01/03/2010 (ambas declaradas nulas).

Ahora bien, la Municipalidad de Calchín decidió ejecutar la sentencia primigenia que la favorecía (fs. 442), valiéndose del efecto no suspensivo del recurso previsto por el art. 8 de la ley 9024. En ese marco, el ejecutado depositó íntegramente el monto de la liquidación, posibilitando el inmediato cobro del crédito cuya ejecución pretendía la actora (fs. 446/475). Finalmente, esa decisión fue revocada y, consecuentemente, rechazada la demanda ejecutiva que fuera entablada por la actora.

La cuestión, entonces, se centra en determinar si la restitución del dinero percibido por la ejecutante vencida, puede ser ordenado en este mismo juicio –tal lo pretende AMX Argentina SA- o si, por el contrario, corresponde avalar el criterio asumido por la Sra. Jueza a quo en el decreto impugnado, en el cual ordena ocurrir por la “vía que corresponda”, es decir la del juicio ordinario de repetición que prevé el art. 9 de la ley 9024 (fs. 517 y 523).

Dice la norma antes citada: “*En los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de impuestos, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto adeudado, sus accesorios y costas*”.

Tal como lo señala Pilar Hiruela, la justificación del juicio de repetición surge palmaria. Efectivamente, es lugar común que el juicio ejecutivo -y mucho menos el fiscal- no constituye, en principio, la vía idónea para el examen y solución integral del conflicto promovido a raíz del incumplimiento de la obligación cuyo cobro se persigue. Su limitado ámbito cognitivo excluye todo aquello que vaya más allá de lo meramente extrínseco,

pudiendo el ejecutado oponer al progreso de la acción -por vía de excepción- en principio, sólo las defensas taxativamente enumeradas (art. 6° de la ley 9024), encontrándose sujeto a restricciones en el plano probatorio (art. 6 y 7 del mismo cuerpo legal). En su mérito...la sentencia mediante la cual culmina la ejecución fiscal, sólo adquiere -por regla- eficacia de cosa juzgada en sentido formal. Consecuentemente, resulta acertada la contemplación de un proceso plenario de conocimiento, susceptible -como tal- de concluir por sentencia dotada de autoridad de cosa juzgada material, en el que cabe articular todas las pretensiones o defensas legalmente excluidas del ámbito del juicio ejecutivo fiscal, así como aquellas cuestiones cuya alegación y prueba se encuentra sometida a limitaciones en éste último (cfr. “La ejecución Fiscal en la Provincia de Córdoba”, Ed. Alveroni, pág. 340).

Así, es posible reflexionar que la antesala del juicio declarativo de repetición es la existencia de un juicio ejecutivo que, en definitiva, concluya con una sentencia favorable al actor ejecutante (el fisco en este caso), cuyo cumplimiento (pago) se impone por su propia fuerza ejecutoria. Cumplida esa condena, el contribuyente puede iniciar el juicio ordinario para demostrar la incorrección del reclamo fiscal y obtener el reintegro de lo que se ordenó pagar en el marco del acotado y formal proceso ejecutivo. Para ello, no cabe duda que la pretensión fiscal, debe culminar con una sentencia que mande llevar adelante la ejecución, en cuya virtud el contribuyente se encuentra compelido a satisfacer el impuesto que se dice adeudado y las costas.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el juicio ejecutivo fiscal terminó con una sentencia desfavorable para el municipio actor, quien -como ya lo señalamos- tomó el riesgo de ejecutarla valiéndose del carácter no suspensivo del recurso articulado por el ejecutado y, en absoluto conocimiento -por ser parte- de la existencia del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, donde se estaba dirimiendo la validez de la obligación tributaria que pretendía ser cobrada a AMX.

El debate profundo, sustancial, de carácter definitivo y no meramente formal del conflicto

tributario que nos ocupa, se dio en la causa “AMX ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CALCHIN –PLENA JURISDICCION – EXPTE. N° 1413296”, cuya sentencia, que pasó en autoridad de cosa juzgada, declaró la nulidad de las resoluciones que determinaron la obligación que en este juicio ejecutivo la Municipalidad de Calchín pretendió ejecutar. Asimismo, en virtud de aquella resolución que dejó sin sustento las liquidaciones de deuda base de esta acción ejecutiva fiscal, la demanda fue rechazada por sentencia dictada por esta cámara con costas en ambas instancias a la actora.

Así planteado el escenario, no cabe entonces un nuevo juicio para definir lo ya definido, esto es que el ingreso del dinero a las arcas municipales no tuvo causa y que el Estado ni siquiera contaba con una decisión judicial que hiciera cosa juzgada formal para pretender ese pago.

De lo que se trata aquí es de hacer cumplir la sentencia que rechazó una ejecución en cuya virtud el ejecutante anticipó el cobro del crédito que pretendía y que -a la postre- le fue desconocido. Remitir a un nuevo juicio o, por si acaso, a una vía de reclamo administrativa, la pretensión del demandado victorioso para recuperar lo entregado en las condiciones antes indicadas, importaría desconocer los efectos de una decisión jurisdiccional irreversible, en claro desmedro de la tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica, cuya garantía le compete esencialmente al Estado en todos sus ámbitos de actuación.

Señala acertadamente María Inés del C. Ortiz de Gallardo que “en el marco de la Constitución provincial de 1987 y la Constitución nacional, cuya reforma en 1994 ha ampliado el bloque de constitucionalidad incorporando al ordenamiento jurídico interno los derechos y garantías reconocidos por los tratados con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, CN); entre ellos merece especial consideración el derecho a la tutela judicial efectiva, receptado en el artículo 8o.

de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que guarda directa vinculación sustancial con el derecho al debido proceso, que garantiza el artículo 18 de la Constitución nacional, y que en el punto objeto de

análisis significa el derecho a obtener la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, y la proscripción de toda inejecución que sea arbitraria, irrazonable y que no se funde en una causa legal o en un supuesto taxativamente previsto, interpretados en el más sentido favorable a la ejecución. Y es así, “...pues sólo de esta manera, el derecho al proceso se hace real, efectivo, y garantiza el pleno respeto a la paz y seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente por una sentencia dictada en un proceso...”, a la vez que opera como una de las garantías más importantes para el funcionamiento y desarrollo del Estado de derecho. El respeto inexcusable de este derecho comprende no solo la facultad de exigir y obtener una sentencia fundada, sino la posibilidad de lograr que la decisión judicial se haga efectiva en tiempo y forma oportuna; como bien ha enfatizado el Tribunal Constitucional de España, lo que se procura es que las resoluciones judiciales no se conviertan meramente en declaraciones de intención, la cuales releguen la efectividad de la tutela judicial a la voluntad caprichosa de la parte condenada” ( “La Ejecución de Sentencia en el Proceso Administrativo” - <http://biblio.juridicas.unam.mx>”).

En consonancia con lo señalado, el Tribunal Superior de Justicia en un precedente de antigua data, dictado en un conflicto en el que un contribuyente entabló una demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción pretendiendo la anulación de decretos vinculados intrínsecamente a otro proceso ya resuelto -aplicable *mutatis mutandi* al caso que aquí nos ocupa- consideró que los actos ejecutorios de una sentencia no deben ser objeto de una nueva causa sino resueltos en el incidente de ejecución del juicio en que recayera sentencia (in re “Abdenur Moisés Gregorio c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Contencioso Administrativo (N° 2), Expte. Letra “A” – N° 10 iniciado el 31 de julio de 1981, Auto Interlocutorio N° 91 del 14/04/1982).

c. Por las razones apuntadas, corresponde en este caso admitir la apelación y revocar la decisión adoptada por la Sra. Juez de primera instancia en cuanto ordena a AMX a ocurrir a la vía del juicio ordinario de repetición para reclamar la restitución de lo pagado con motivo de

la ejecución provisional de la sentencia luego revocada.

En su defecto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la necesidad de garantizar un debido contradictorio, acotado a la materia que motivó la presentación de la demandada (hoy pretensa ejecutante) -obrante a fs. 406 y 511- deberá procederse por vía incidental de ejecución en los términos que indican los arts. 808, 809 y siguientes del C. de P.C., sin perjuicio de la aplicación oportuna del art. 806 del rito, lo cual deberá ser proveído por el tribunal de origen una vez devueltos estos actuados.

**d.** Finalmente, cabe precisar que los términos de la resolución que rechaza el pedido de aclaratoria de la sentencia dictada por esta cámara, que fuera realizado por la demandada apelante a los fines de lograr un pronunciamiento respecto al pedido de devolución de capital, intereses y costas que su parte se viera obligada a pagar en virtud de la ejecución impetrada por la actora (fs. 394), en nada obstaculiza la decisión que ahora se adopta, en tanto aquel rechazo estuvo fundado en razones meramente formales ya que excedía los términos de aquel debate apelativo (fs. 395).

**e.** Las costas se imponen por el orden causado en razón del tenor de la cuestión, de tinte novedoso, y la falta de controversia en esta sede.

Por lo expuesto, y lo dispuesto por el art. 382 del c. de P.C.

#### **SE RESUELVE:**

**1)** Admitir parcialmente el recurso de apelación articulado en subsidio al de reposición por parte de AMX ARGENTINA S.A., en contra del decreto de fecha 27/05/2019 (fs. 517), mantenido por decreto de fecha 03/12/2019 (fs. 523), dictado por la Jueza de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, Oficina única de Ejecución Fiscal, en cuanto ordena a la demandada a ocurrir a la vía del juicio ordinario de repetición para reclamar la restitución de lo pagado con motivo de la ejecución provisional de la sentencia luego revocada. En su mérito, disponer que una vez restituidos estos actuados al tribunal de origen, se provea la presentación de la demandada (hoy pretensa ejecutante) -obrante a fs. 406

y 511- dándosele trámite incidental de ejecución en los términos que indican los arts. 808, 809 y siguientes del C. de P.C., sin perjuicio de la aplicación oportuna del art. 806 del rito.

**2) Imponer las costas por el orden causado.**

**3) No regular honorarios al letrado interviniente en esta oportunidad (art. 26, *contrario sensu*, CA).**

**Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.**

Texto Firmado digitalmente por:

**YACIR Viviana Siria**

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.08.29

**BARBARA Jorge Augusto**

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.08.29